JUZGADO CUARENTA LABORAL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C, veintidós (22) de abril de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA: Acción de tutela promovida por Gloria Belinda Méndez Peña por intermedio de apoderado judicial contra Colpensiones. Radicado 2021-00024-00.

Agotado el trámite del asunto, y no observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede el despacho a dictar sentencia dentro de la acción de tutela de la referencia.

ANTECEDENTES

DERECHOS INVOCADOS: Solicita la actora que se le amparen sus derechos fundamentales a la vida, libre desarrollo de la personalidad y la vida digna de las personas de la tercera edad.

PERSONA O ENTIDAD CONTRA LA QUE SE DIRIGE LA ACCIÓN: la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones - Dirección de prestaciones económicas y Dirección de nómina de pensionados.

PRETENSIÓN: Ordenar a la accionada Colpensiones para que de forma inmediata realice el pago del reconocimiento de la indemnización de sobreviviente a que tiene derecho la accionante Gloria Belinda Paez Arteaga.

HECHOS RELEVANTES: Como fundamento del amparo constitucional, en síntesis, se relacionaron los siguientes:

1. El 17 de febrero de 2021, se notificó a la señora Gloria Belinda Paez Arteaga por intermedio de su apoderado judicial, de la resolución 2020_12911466 del 25 de enero de 2021, mediante la cual se le reconoce y ordena el pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente, por una sola vez, en porcentaje del 50% con ocasión del fallecimiento del señor Gutiérrez Almeida (pág 3 a 14, pdf 003 del expediente digital).
2. Informa que el pago reconocido en la mentada resolución por monto de \$21'908.870, debía ser consignado en la cuenta de nómina de la hoy accionante en el banco BBVA, desde el pasado mes de febrero del año en curso, siendo pagadera en la mensualidad de marzo de 2021, sin que a la fecha de presentación del escrito tutelar se hubiese efectuado.
3. Que el 17 de marzo de 2021, presentó derecho de petición con PQR y radicado 2021_3217673 ante la hoy accionada administradora de pensiones, sin que a la fecha la citada entidad diera respuesta al respecto.

TRÁMITE PROCESAL

La acción de tutela fue admitida mediante auto del 9 de abril de 2021 (archivo pdf 006 del expediente digital) y fue notificada a Colpensiones a la

dirección de prestaciones económicas y a la Dirección de nómina de pensionados de la misma entidad en debida forma tal y como consta en archivos pdf 007, 008, y 009 del expediente digital; de otra parte se comunicó la existencia del presente trámite tutelar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (archivo pdf 011 del expediente digital).

CONTESTACIÓN:

La accionada Colpensiones por intermedio de la dirección de acciones constitucionales, rindió informe el pasado el 13 de abril de 2021, tal y como consta en páginas 14 a 20 del archivo pdf 013 del expediente digital, en los siguientes términos:

- Señala que al accionante pretender el pago de la indemnización sustitutiva de sobrevivientes por vía tutelar, desnaturaliza este mecanismo de protección de carácter subsidiario y residual a los derechos invocados, máxime cuando el asunto en cuestión no ha sido sometido a los procedimientos pertinentes e idóneos para su solución, destacando que la acción de tutela no es el mecanismo para realizar este tipo de reconocimientos.
- Solicita que con fundamento en la normatividad y jurisprudencia expuesta se deniegue la acción de tutela por improcedente.

CONSIDERACIONES

La acción de tutela se estableció como un mecanismo para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia y, la misma fue reglamentada en el Decreto 2591 de 1991, que señaló las reglas básicas de su aplicación. Es así como el artículo 6° de dicha normativa delimitó su procedencia para situaciones en las cuales no existieran recursos o mecanismos judiciales ordinarios salvo que fuera interpuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no obsta para que se analice en cada caso si el procedimiento correspondiente resulta eficaz de acuerdo con las circunstancias fácticas y jurídicas.

PROBLEMA JURÍDICO corresponde al despacho resolver lo siguiente:

¿Es la acción de tutela el mecanismo procedente para ordenar el pago de la suma de \$21'908.870.00, por concepto de indemnización sustitutiva de pensión de sobreviviente, reconocida en resolución n° 2020_12911466 del 25 de enero de 2021 en favor de la señora Gloria Belinda Paez Arteaga por el fallecimiento del afiliado Luis Ernesto Gutiérrez Almeida?

CARÁCTER RESIDUAL Y SUBSIDIARIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA

A partir del artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela fue consagrada como un mecanismo judicial subsidiario y residual, que solo procederá *cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial*.

Por su parte, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece de manera clara que una de las causales de improcedencia de la acción de tutela ocurre “cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.” (Subrayas fuera del texto original). En este sentido, el juez constitucional deberá analizar las circunstancias específicas del caso objeto de análisis para determinar si los medios o recursos de defensa judicial existentes son idóneos para solucionar la situación del accionante.

De otro lado, en sentencia T723 de 2021 el órgano de cierre, al respecto del carácter subsidiario que hace parte de la naturaleza de la tutela, precisó: “procede de manera excepcional para el amparo de los derechos fundamentales vulnerados, por cuanto se parte del supuesto de que en un Estado Social de Derecho existen mecanismos judiciales ordinarios para asegurar su protección”. Lo anterior bajo el entendido que este mecanismo constitucional no fue diseñado para suplir los procesos ordinarios a los cuales deben acudir los ciudadanos para dar solución a sus controversias.

No obstante lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 2591, en los casos en que aún así existan medios principales de defensa judicial, la jurisprudencia reconoce dos excepciones a la improcedencia del recurso de amparo por subsidiariedad. En sentencia T.387 de 2018, al respecto señaló:

“i) Si bien, en abstracto, existe otro medio de defensa judicial y el accionante cuenta con él para la defensa de sus derechos, desde la perspectiva de la relación entre el mecanismo y el fin constitucional perseguido por el actor, aquel no tiene la virtualidad de conjurar un perjuicio irremediable. De tal forma, la acción de tutela procede como mecanismo transitorio, mientras el interesado acude a la vía ordinaria para discernir el caso o esta resuelve definitivamente el asunto y, momentáneamente resguarda sus intereses.

ii) Si bien existe otro medio de defensa judicial, éste no es eficaz para proteger los derechos fundamentales invocados, caso en el cual la tutela procede de manera definitiva. El análisis sobre la eficacia del medio ordinario se encuentra determinada por el contraste entre éste y las condiciones particulares del accionante.”

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL PAGO DE ACRENCIAS PENSIONALES

Como regla general la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la improcedencia de la acción de tutela para ordenar el pago de acreencias pensionales. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha previsto que excepcionalmente el amparo de tutela es procedente para ordenar dicho pago, siempre y cuando cumpla unos requisitos específicos que aseguren el respeto de derechos fundamentales, en este sentido es importante tener en cuenta las consideraciones previstas en la sentencia T-539 de 2014:

“En nuestro ordenamiento jurídico existen mecanismos judiciales ordinarios para la satisfacción de los intereses y protección de los derechos de los

ciudadanos, sin embargo cuando de cara a la situación especial del demandante estos mecanismos resulten ineficaces, inexistentes, o se configure un perjuicio irremediable, la acción de tutela es procedente de forma excepcional como mecanismo de protección principal o transitorio de los derechos fundamentales.

En ese sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado reiteradamente que por regla general la acción de tutela es improcedente para reconocer y pagar un derecho de naturaleza pensional, debido a la existencia de otros medios de defensa judicial que en principio se presumen idóneos y eficaces para solucionar el asunto. Empero, constatada la afectación de un derecho fundamental y la inminencia de un perjuicio irreparable que se deriva de esta afectación, el conflicto que en principio podría ser resuelto por la jurisdicción ordinaria por ser de naturaleza legal, se torna en un conflicto constitucional al estar en juego la satisfacción de un derecho fundamental que hace imperiosa la intervención del juez de tutela, más aún cuando se trata de la afectación a un sujeto de especial protección”.

Es así como el Tribunal Constitucional colombiano ha previsto excepcionalmente el pago de prestaciones económicas derivadas del sistema general de seguridad social, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: “(i) la existencia y titularidad del derecho reclamado, (ii) un grado importante de diligencia al momento de buscar la salvaguarda del derecho invocado y; (iii) la afectación del mínimo vital como consecuencia de la negación del derecho prestacional”. (Sentencia T-539 de 2014).

CASO CONCRETO:

En primer lugar, es del caso advertir que la señora Gloria Belinda Páez Arteaga, pretende a partir del presente amparo constitucional, se le ordene a la entidad accionada realizar el pago reconocido en su favor en la resolución n° 2020_12911466 del 25 de enero de 2021 por concepto de la indemnización sustitutiva de pensión de sobreviviente en calidad de cónyuge del extinto señor Luis Ernesto Gutiérrez Almeida. La anterior solicitud, tiene como fundamento, según el escrito tutelar, su edad, estado de salud y precaria situación económica.

La problemática central a resolver en el presente trámite constitucional, es determinar, si la acción de tutela es el mecanismo de defensa judicial establecido para ordenar a la accionada pagar por una sola vez de la suma de \$21'908.870.00, correspondiente al 50% a la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente reconocida en resolución n° 2020_12911466 del 25 de enero de 2021. Al respecto de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte Constitucional en sentencia T009/2020 puntualizó:

“...(i) legitimación por activa, la solicitud puede ser ejercida por todas las personas cuyos derechos fundamentales se encuentren vulnerados o amenazados. Aquellas podrán actuar por sí mismas o por conducto de un tercero que intervenga en su nombre; (ii) legitimación por pasiva, el amparo procede contra las acciones u omisiones de las autoridades públicas y, excepcionalmente, de particulares; (iii) subsidiariedad, la acción de tutela resulta procedente cuando no existen otros mecanismos de defensa judicial disponibles, cuando los mecanismos disponibles no resultan idóneos o eficaces a la luz de las circunstancias del caso concreto o, cuando aun siéndolo, se requiere evitar la consumación de un perjuicio irremediable, en

cuyo caso se emplea la acción como mecanismo transitorio; e (iv) Inmediatez, no puede transcurrir un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado entre la actuación u omisión y el uso efectivo del amparo...” .

Para el caso en estudio se destaca que el amparo fue invocado por la persona a quien se le reconoció el derecho a la indemnización sustitutiva de pensión de sobreviviente y se presenta en contra la entidad que reconoció tal derecho y quien debe realizar el pago, razón por la cual se encuentran cumplidos los presupuestos de legitimación en la causa, no obstante lo anterior, no sucede lo mismo con el requisito de subsidiariedad, con fundamento en los siguientes argumentos:

Al respecto, la Corte Constitucional ha reiterado que si existen otros medios de defensa, bien sea en sede administrativa o judicial, para obtener la protección de los derechos de estirpe legal que se sostienen han sido vulnerados, es resorte del interesado ejercitarlos ante la autoridad correspondiente, en dichos eventos no será procedente acudir a la vía tutelar, de tal suerte que la acción de tutela es un mecanismo EXCEPCIONAL, que brinda la protección inmediata de los derechos constitucionales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción de cualquier autoridad pública, pero en ninguna manera se establece como acción que pueda ser sustitutiva de las acciones ordinarias que se ejercen ante las autoridades jurisdiccionales competentes.

Así mismo, se ha señalado que si lo pretendido es evitar la consumación de un perjuicio irremediable de los derechos fundamentales, procederá la tutela como un mecanismo transitorio de tal protección. En este evento, se tendrían que dar las siguientes hipótesis para que la tutela pueda ser procedente: “(i) que se trate de un hecho cierto e inminente; (ii) que las medidas a tomar deben ser urgentes; (iii) que la situación a la que se enfrenta la persona es grave; y finalmente (iv) que las actuaciones de protección han de ser impostergables.

Como quiera lo pretendido es el pago de una prestación económica reconocida en resolución n° 2020_12911466 del 25 de enero de 2021, es decir la suma de \$21'908.870.00, correspondiente al 50% a la indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente reconocida en favor de la señora Gloria Belinda Paez Arteaga por el fallecimiento de su cónyuge Luis Ernesto Gutiérrez Almeida, frente a la cual se consagran para su ejecución medios y procedimientos ante la jurisdicción ordinaria laboral, es evidente que no es la acción de tutela el mecanismo apropiado para obtener el pago de la suma reconocida a través del citado acto administrativo, sin que tampoco se encuentre acreditado que para el caso concreto de la actora el trámite de ejecución ante la jurisdicción ordinaria laboral no constituye un mecanismo efectivo de defensa de sus derechos.

Al respecto la actora, por intermedio de su apoderado judicial, se limitó a afirmar que se trata de una persona de la tercera edad con precaria situación económica y afectaciones en su salud, sin que se haya acreditado al menos sumariamente alguna de dichas condiciones de vulnerabilidad, por el contrario, de lo único que se encuentra soporte es de su edad, en la medida que se allegó copia de su cedula de ciudadanía (pag. 4 archivo pdf 012) que da cuenta que la actora tiene 63 años de edad, es decir que muy lejos se encuentra de superar la expectativa de vida en Colombia,

requisito necesario para considerarse como de la tercera edad. (Sentencia T – 015 de 2019)

En síntesis, se torna improcedente la acción de tutela, para buscar a través de este mecanismo, el pago de la prestación económica reconocida por la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, por lo que el amparo constitucional será negado, por la existencia de otro mecanismo eficaz de defensa judicial de los derechos de la actora – proceso ejecutivo laboral-, y porque no se encuentra acreditada la existencia de un perjuicio irremediable, que abra paso a la protección inmediata de sus derechos.

Finalmente, se advierte que el pasado 17 de marzo de 2021 la parte actora por intermedio de su apoderado judicial diligenció formulario de derecho de petición con PQR y radicado 2021_3217673 ante la hoy accionada administradora de pensiones (pág. 19, pdf 003 del expediente digital), no obstante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 del decreto 491 de 2020 respecto de la ampliación de términos para atender las peticiones, la accionada aún se encuentra dentro de los 30 días que le otorga la ley para resolver de fondo este pedimento.

Ateniendo la solicitud de corrección del número de cedula de la actora consignado en el auto admisorio de la demanda, allegándose como soporte la copia de su cédula de ciudadanía, (pag. 004 archivo 012) se accederá a ella, con la advertencia que fue la misma parte actora quien hizo incurrir en error al Juzgado al consignar en el escrito de demanda un número de cedula de ciudadanía incorrecto.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, la Juez Cuarenta Laboral del Circuito de Bogotá D.C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad constitucional,

RESUELVE:

PRIMERO: NEGAR por improcedente la presente acción, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de este proveído.

SEGUNDO: CORREGIR el auto admisorio de la acción, dictado el 9 de abril de 2021, en el sentido de señalar que el número de cedula de la actora es 37.828.347.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes el contenido de esta sentencia.

CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado, **REMÍTASE** el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual Revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUISA FERNANDA NIÑO DÍAZ
JUEZ
Proyectó GMG

Firmado Por:

LUISA FERNANDA NIÑO DIAZ
JUEZ

JUEZ - JUZGADO 040 DE CIRCUITO LABORAL DE LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C.-SANTAFE DE BOGOTA D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 124e52becb7f2caa9940c2cef0c01e857f1d99d81d91e2dc6b27039bb479c746
Documento generado en 22/04/2021 11:46:27 AM

Valide este documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>